

Como citar este artículo: Pastorini, A. y Lopez de Araújo, V. M. Crisis del ciclo progresista y la política social en Brasil: retomando la pragmática conservadora. *Fronteiras* 16 (1): 44-57, enero-junio 2021.

Crisis del ciclo progresista y la política social en Brasil: retomando la programática conservadora

Crisis of the progressive cycle and social policy in Brazil: resumption of the conservative program

Alejandra Pastorini¹ y Victor Martins Lopes de Araújo²

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5976-5938>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6175-463X>

Resumen

Este artículo se apoya en una revisión bibliográfica y tiene como objetivo abordar algunos elementos importantes para pensar las determinaciones estructurales y coyunturales que inciden en las transformaciones de las políticas sociales en Brasil en los últimos 30 años. El texto indica que la crisis estructural es un determinante central en el proceso de cambio en la protección social caracterizado por la retracción de derechos y el aumento de medidas punitivas y coercitivas. Este proceso de transformación de las políticas sociales brasileñas, que se encuentra en marcha desde la década de los noventa, es tensionado por las luchas y disputas de diferentes grupos sociales que buscan definir la dirección política y social de estas políticas públicas.

Palabras claves: crisis del capital, políticas sociales, progresismo, neoliberalismo

Abstract

This article is based on a bibliographic review and aims to address some important elements to think about the structural and conjunctural determinations that affect the transformations of social policies in Brazil in the last 30 years. It points out that the structural crisis is a central determination in the process of changes in social protection structures characterized by the withdrawal of rights and the increase in punitive and coercive measures. This process of transformations in Brazilian social policies, which has been underway since the 1990s, is strained by the struggles and pressures of different social groups that dispute the political and social direction of these public policies.

Keywords: Capital Crisis, Social Policies, Progressivism, Neoliberalism

1 Doctora y Mestre en el Programa de Pós graduação em Serviço Social. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora en la Escola de Serviço Social de la Universidade Federal do Rio de Janeiro.

2 Mestre em Serviço Social. Universidade Federal de Juiz de Fora. Doutorando em Serviço Social - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) - Unidade de Carangola/MG

Introducción

Las políticas públicas, el Estado, las desigualdades y las opresiones son preocupaciones teóricas que no abandonan el debate contemporáneo y, probablemente, seguirán siendo importantes en el actual contexto de intensificación de la crisis. Sin embargo, algunas de las determinaciones que durante mucho tiempo fueron entendidas como secundarias, son actualmente identificadas como centrales para develar las recientes transformaciones en los formatos de protección social. Partimos de la idea que esos cambios en las políticas sociales se relacionan con el movimiento del capital y con las formas particulares que asume el capitalismo en las regiones denominadas “periféricas”, como es el caso de América Latina.

Estos cambios contemporáneos y las particularidades que asumen en un país como Brasil, caracterizado por la extrema desigualdad de clases y las opresiones raciales y de género, nos desafían en el cotidiano profesional en diferentes espacios sociolaborales. El escenario actual de retroceso de derechos, reducción de la protección social pública y aumento de las medidas punitivas, nada alentador respecto a la garantía los derechos mínimos para consolidar una sociedad civilizada, requiere la realización de análisis críticos y autocríticos para construir un camino que nos permita ir en el sentido contrario de las inhumanidades, de las discriminaciones, violencia, indiferencia hacia el otro: de la barbarie.

Buscando contribuir al debate colectivo, en este artículo – resultado de una investigación teórica– nos proponemos reflexionar sobre las determinaciones estructurales y coyunturales que inciden en las transformaciones de los mecanismos de protección social en Brasil en los últimos años. Partimos de la idea de que, con la consolidación del neoliberalismo en América Latina a partir de la década de los noventa, se produce un proceso de destrucción de las frágiles y segmentadas estructuras de protección social que fueron organizadas, de manera diferente, desde principios del siglo XX.

Con este objetivo, comenzamos nuestras reflexiones haciendo algunas consideraciones sobre

la crisis estructural que se expresa por la exacerbación de la destructividad y que es inseparable de la crisis de la política y los mecanismos regulatorios –entre ellos las políticas sociales– que fueron fundamentales para valorizar y expandir el capital hasta la década de 1970. A continuación, abordamos el proceso de consolidación del neoliberalismo y su vínculo con la crisis del capital, guiados por la idea de que los cambios en las políticas sociales y en los mecanismos de protección laboral son piezas fundamentales del conjunto de transformaciones necesarias para retomar el crecimiento económico. En un tercer momento, realizaremos un estudio crítico de los llamados gobiernos progresistas de centroizquierda³, tomando como referencia las particularidades del caso brasileño. Entendemos que estos gobiernos expresan avances en cuanto a la garantía de los derechos y protecciones sociales (organizados, principalmente, a través de redes mínimas estructuradas en torno a los programas de transferencias monetarias y aumento del consumo), así como en los esfuerzos para reducir las desigualdades y opresiones raciales y de género. Sin embargo, este programa permitió, al mismo tiempo, crear las condiciones para garantizar la acumulación de capital y perpetuar el poder y el control de los grupos históricamente dominantes. Las reflexiones sobre el proyecto “neodesarrollista”, basado en el modelo extractivo y en la exportación de *commodities*, fueron un marco importante para la estructuración de este apartado, que toma como punto de partida la idea de que los cambios ocurridos en la formación social brasileña en los últimos años no pueden entenderse como una singularidad única y exclusiva

3 Para Katz (2008), tres tipos de gobierno predominaron en América Latina en la década de 2000: conservadores, centroizquierdistas y nacionalistas radicales. Los presidentes más representativos de estas variantes son Uribe en Colombia, Lula en Brasil (o Kirchner en Argentina) y Chávez en Venezuela. Los conservadores son neoliberales, pro-estadounidenses, represivos y se oponen a cualquier mejora social. Los de centroizquierda mantienen una relación ambigua con Estados Unidos, arbitran entre la comunidad empresarial, toleran las conquistas democráticas, pero tienden a bloquear las mejoras populares. Los nacionalistas radicales son más estatistas, chocan con el imperialismo y la burguesía local, pero oscilan entre el neodesarrollismo y la redistribución del ingreso.

de Brasil, ya que estas transformaciones aparecen como tendencia en varios países de la región (Argentina, Chile, Uruguay, son algunos ejemplos).

Cerramos el artículo con la identificación de algunos elementos que indican la presencia y avance de un proyecto conservador de derecha que busca consolidarse en los últimos años, de diferentes formas, en América Latina. Este proyecto que pretende intensificar la política macroeconómica neoliberal se vuelve cada vez más impermeable a las demandas y reivindicaciones de los trabajadores y sectores subalternos que se convierten en destinatarios prioritarios de políticas, acciones y legislación punitivas y violentas, y sus luchas y organizaciones resultan intensamente criminalizadas.

1. Notas sobre la crisis estructural

Las aceleradas transformaciones son una marca del escenario actual impuesto por las necesidades del capital como forma de enfrentar las barreras que limitan su valorización y expansión. Es importante señalar que la crisis actual en el mundo capitalista, con sus particularidades en América Latina constituye un reflejo de la crisis estructural del capital y, al mismo tiempo, una expresión de la crisis de la política (Mascaro, 2019). En este sentido, nos parece interesante mencionar que Brasil no es una excepción a la regla, de esa forma no escapa a las determinaciones generales de la sociabilidad burguesa, mediadas por las particularidades de esta formación social singular.

La crisis del capital es el epicentro del que debe partir cualquier análisis de las aparentes transformaciones, ya sea en el mundo del trabajo, en el ámbito político, en los mecanismos de regulación y protección social, en la intensificación de la cuestión social, ya que todos estos cambios tienen una raíz común: el antagonismo irreconciliable entre capital y trabajo que, al mismo tiempo, reproduce y perpetúa las relaciones de subordinación, dependencia y subyugación entre países y regiones.

A diferencia de las crisis periódicas, la actual “crisis estructural se extiende a todos los ámbitos de

la actividad productiva y reproductiva y se manifiesta como una crisis que ‘afecta a la totalidad de un complejo social en todas las relaciones con sus partes constituyentes o subcomplejos’ [...]” (Paniago, s / d, p. 13). Así, afirmamos que la crisis que se manifiesta desde la década de los años 1970 tiene características que la diferencian de las crisis periódicas anteriores; es una crisis que presenta nuevos elementos. Según Mészáros,

- (1) su carácter es universal, en lugar de ser restringido a una esfera particular [...];
- (2) su alcance es verdaderamente global [...], en lugar de estar limitado a un conjunto particular de países [...];
- (3) su escala de tiempo es extensa, continua, o si se prefiere, permanente, en lugar de limitada y cíclica, como lo fueron todas las crisis del capital anteriores;
- (4) en contraste con las erupciones y colapsos más espectaculares y dramáticos del pasado, su modo de desenvolverse podría denominarse como reptante [...] (2002, p. 796).

Como indica el citado autor, las diversas estrategias del capital para enfrentar las barreras que limitan su expansión alimentan e intensifican la destrucción (del trabajo, de la naturaleza y de la humanidad). Si bien la destructividad es inseparable de la lógica del capital y la valorización, en el contexto actual de crisis estructural, este rasgo destructivo produce consecuencias devastadoras que ponen en peligro la sobrevivencia de la humanidad.

Este contexto de crisis indica el fin del ciclo de expansión del capital que permitió la convivencia entre la acumulación (basada en los principios del fordismo y keynesianismo) y la atención de parte de las demandas de algunos sectores de trabajadores y grupos subordinados, especialmente en los países capitalistas centrales. El “binomio crecimiento / garantía de protección social” colocó al Estado moderno como el principal –no el único– responsable por los mecanismos regulatorios y por las estructuras de protección social. De esa forma, el Estado fue presentado, por los representantes del capital, como un “agente conciliador” de intereses irreconciliables.

Sin embargo, la forma política y jurídica que asume el Estado en el capitalismo, como comando

político del capital, está tensionada por luchas sociales y enfrentamientos entre clases y sectores de clases que disputan la dirección económica y política en la sociedad. Estas luchas y presiones también son centrales para definir la forma particular que asumen las estructuras de protección social en las diferentes formaciones sociales y en diferentes momentos históricos.

A partir de esta dinámica de la sociabilidad burguesa tensionada por las luchas, podremos desvelar los procesos que, después de la Segunda Guerra Mundial, contribuyeron para que el Estado del Bienestar se consolidara en algunos países del capitalismo avanzado, como forma político-económico articulada de manera coherente con la expansión del capital en un contexto caracterizado por la ampliación de los partidos socialdemócratas que asumieron la estrategia reformista conservadora.⁴ Así, como explica Paniago,

La excepcionalidad histórica de este período, que estableció la base material para el crecimiento de las ilusiones socialdemócratas de estar promoviendo el avance gradual hacia el socialismo, se sustentaba en la superexplotación de la fuerza de trabajo y en la fragmentación de la clase al restringir, en estos países, acceso a los beneficios del *Welfare State* a algunos segmentos internos, sacrificando los segmentos de la clase trabajadora en el resto del mundo (2017, p. 156-157).

Hoy, en el contexto de una crisis estructural, esas formas de regulación que fueron útiles para desplazar las barreras encontradas por el proceso de expansión del capital y así administrar las crisis cíclicas, van perdiendo su importancia y centra-

lidad. Como analiza Mészáros en las últimas décadas es necesario,

al menos una intervención del Estado en los procesos socioeconómicos (ahora, más que nunca, en nombre del *big business*) tan grande como en la variante keynesiana. La única diferencia era que, adicionada a la generosa ayuda brindada al *big business* – desde enormes incentivos fiscales hasta prácticas corruptas de “privatización”, desde abundantes fondos de investigación (especialmente en beneficio del complejo militar-industrial) hasta la facilitación más o menos abierta de la tendencia al monopolio –, la “derecha radical” también tuvo que imponer toda una serie de leyes represivas al movimiento de los trabajadores. Irónicamente, las leyes represivas contra el trabajo tuvieron que ser introducidas “suavemente” a través de los buenos servicios de los “parlamentos democráticos”, con la finalidad de negar a la clase trabajadora incluso las conquistas defensivas del pasado, en consonancia con los márgenes de acumulación del capital, cada vez más estrechos, debido a la marcha de la crisis estructural (2002, p. 822).

Es así como, en el mundo capitalista en la actualidad, aunque de diferentes formas en diferentes formaciones sociales, se requiere una reorganización de la producción que, teniendo como motor la llamada reestructuración productiva, fortalezca nuevas formas de regular y controlar el trabajo. Para consolidar estas transformaciones fue necesaria una ofensiva directa contra las organizaciones de los trabajadores; también, el aumento del desempleo, la precariedad laboral y los procesos de tercerización fueron elementos importantes que obstaculizaron la combatividad de estas organizaciones de los trabajadores que se estructuraron siguiendo la lógica sectorial y vertical de organización de la producción.

Los procesos de privatización que se intensificaron durante los gobiernos neoliberales ortodoxos, y también en los gobiernos “progresistas” en Brasil, fueron importantes como contratendencias a las barreras que encontró el capital para su expansión. Estos procesos permitieron ampliar los espacios de valorización del capital, que pasa a encontrar en el área social (especialmente en salud, educación y previsión social), en el Estado

4 Para Mészáros (2002: 777), los partidos socialdemócratas occidentales pasaron por transformaciones significativas desde su génesis en el siglo XIX. De representantes de una fuerza que luchaban por la emancipación del trabajo asociado con la lucha contra la fragmentación y contra la dominación de la clase trabajadora con el objetivo de transformar la organización del trabajo “en una efectiva fuerza colectiva con conciencia de clase” (hasta el inicio de la década de 1870), pasando por la constitución de una organización que aún pretende defender el socialismo, aunque entiende que la forma de lograrlo pasa por realizar reformas graduales (socialismo evolucionista defendido por Bernstein), se convirtieron en partidos liberales burgueses, con vocación de auxiliar al sistema capitalista a mantener la dominación del capital sobre el trabajo (Melo, 2018, p. 99).

y en el sector servicios, nuevos e importantes nichos de inversión y valoración.

Fue en este contexto de avance del proyecto neoliberal en el mundo, principalmente a partir de la década de los noventa, que en varios países latinoamericanos se empezó a discutir la reorganización de la protección social, que estuvo fuertemente marcada por la selectividad, el corporativismo, la exclusión de grupos de trabajadores, la diferenciación de beneficios y entre beneficiarios, buscando así organizar nuevos mecanismos y medidas de protección (Pastorini; Galizia, 2012).

2. La crisis y el neoliberalismo en América Latina

La crisis que se precipita a mediados de la década de 1970 fue interpretada por los apologistas del capital como una crisis del “Estado de bienestar social”. Esta crisis concebida al mismo tiempo como “crisis fiscal” fue utilizada como justificación para implementar un conjunto de reformas que fueron conocidas como “paquete de ajuste estructural” (orientado por los principios del neoliberalismo ortodoxo). Incluso en países que no tuvieron esas experiencias de Estados de bienestar, como es el caso de Brasil, sus precarios y frágiles mecanismos de regulación y protección social y laboral fueron responsabilizados por la crisis.

Asimismo, como indica Melo, se trata de una crisis del capital y no de una forma particular del Estado burgués,

Mientras el capital pudo ofrecer ventajas materiales al movimiento obrero y logró que este movimiento adecuara sus demandas reivindicatorias a las garantías posibles de ser incorporadas a las necesidades de expansión y acumulación capitalista, la legitimidad del orden social establecido no fue desafiada por el trabajo. Sin embargo, esta situación ha cambiado desde 1970, con el surgimiento de la crisis estructural del capital (2018, p. 144).

La crisis del capital de la década de 1970, que tiene carácter universal y alcance global, repercute mundialmente y se expresa en la totalidad

social (en la producción, en el Estado, en la política) busca ser presentada, por los técnicos ortodoxos neoliberales, como una crisis fiscal que se expresa, principalmente, por el aumento del gasto social de los Estados capitalistas que implementaron las experiencias de los *Welfare States*, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En contraposición a esas experiencias desarrolladas en unos pocos países capitalistas entre fines de los años setenta e inicios de los ochenta se percibió el surgimiento de gobiernos neoliberales en Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, proyecto que se extendió por todo el mundo en la década de los noventa.

Como señala Iamamoto (2010), a partir de 1970 la acumulación y expansión pasan a estar comandadas por capital financiero que se articula con grandes grupos industriales transnacionales. Esta nueva realidad

requiere una reorganización de la producción y de los procesos de gestión y control de la fuerza de trabajo que se insertan en ella, también diferentes mecanismos para administrar la superpoblación relativa. En este contexto hegemónico por el capital financiero, el Estado, afectado por las reformas de orientación neoliberal, desarrolla sus funciones económicas directas e indirectas de manera diferente en la búsqueda de crear condiciones de valorización y acumulación del gran capital especulativo (Pastorini; Martínez, 2014, p. 60).

La búsqueda de la consolidación de las ideas neoliberales se da en un contexto de crisis de los pactos liberal-sociales democráticos en países de capitalismo avanzado, como es el caso de Europa. Los cimientos de los llamados Estados de bienestar: producción y consumo en masa articulados con las políticas de creación de empleo, redistribución de renta y reconocimiento de los derechos de ciudadanía —dentro de los límites de los Estados nacionales— dejaron de atender a las necesidades de expansión del capital.

Para los defensores de un proceso de reestructuración sin un amplio pacto entre los actores sociales y políticos, los cimientos del fordismo, keynesianismo y marshallianismo se han convertido simplemente en “cosas del pasado”. Para estos sectores

(identificados como neoliberales), el fundamento ha sido liberar el proceso de reestructuración en curso (el nuevo patrón de acumulación) de las “barreras” sociopolíticas y nacionales, minimizando la presencia de los Estados, de la política y barreras nacionales - reduciendo, con esto, las posibilidades y espacios de intervención de los ciudadanos y de las instituciones democráticas sobre la acumulación del capital (Abreu, 1997, p. 57).

Vale la pena recordar que la dinámica neoliberal no solo se extendió por todo el mundo bajo el dominio del capital, sino que fue inmensamente destructiva para los derechos conquistados por la clase trabajadora en los “años dorados”. Las “políticas de ajuste” impuestas por los organismos financieros internacionales —Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial— fueron parte de un movimiento de reorganización global, que se desarrolló en un contexto de globalización financiera y productiva. Este proceso se caracteriza por una reorganización de la jerarquía de las relaciones económicas y políticas internacionales, materializada en el llamado Consenso de Washington.

Así, con la participación de organismos internacionales, las políticas de ajuste neoliberal avanzan rápidamente en América Latina para seguir garantizando la máxima extracción posible de plusvalía producida en la región y su apropiación por parte del gran capital. América Latina fue el laboratorio de las experiencias neoliberales. En nuestro continente, este ideario se puso en práctica con toda su fuerza en el contexto de la dictadura de Pinochet, y luego se extendió a otros países de la región y al resto del mundo capitalista. Este gran proyecto de capital para administrar la crisis fue presentado por sus formuladores y por las clases dominantes como la alternativa para recuperar el crecimiento económico, es decir, como la inevitable y única solución ante el agravamiento de la crisis. Las reformas de los Estados y los procesos de privatización, que fueron piezas centrales en este proyecto, también tuvieron un fuerte impacto en las estructuras de protección social que habían sido desarrolladas hasta ese momento.

En los últimos años, hemos notado cambios importantes en la protección social, y especialmente

en la forma de articulación entre la previsión social y la política asistencial [...], transformaciones íntimamente ligadas al contexto de crisis vivido desde finales de la década de 1970, en el mundo capitalista [...] (Pastorini, 2007, p. 1).

A lo largo de la década de 1990 asistimos a un fuerte ataque contra las estructuras públicas de protección social organizadas en la región a lo largo del siglo XX. Dejando de lado las diferencias entre las formas particulares que adoptan estas estructuras de protección en cada país, la mayoría de ellas se caracterizaron por la preocupación por el enfrentamiento de riesgos colectivos, su carácter redistributivo, la presencia del Estado en su administración, financiamiento y ejecución, y por el esfuerzo por consolidar las políticas de previsión, salud y educación como pilares de la protección que se combinaban con los derechos laborales (que protegían principalmente a los trabajadores urbanos y con vínculos formales de empleo).

Bajo el alegato de la “crisis fiscal” y buscando erosionar estas estructuras de protección, los técnicos neoliberales proponen reforzar los mecanismos de selectividad y focalización de acciones que asumen como prioridad atender a los sectores más pobres. Estos grupos son actualmente atendidos a través de programas compensatorios focalizados en la pobreza absoluta. Esta estrategia de “combate a la pobreza” que se amplía en la región a partir de 1990 y que se centra en los programas de transferencias de ingresos (PTI) se combina con la intensificación de programas de privatización que inciden en diferentes políticas sociales (educación, salud y previsión social) pasando a transformar el espacio de “lo social” en importantes nichos de valorización del capital.

Diversos estudios e investigaciones demuestran la concomitancia temporal entre las reformas de los Estados (y los procesos de privatización) y la consolidación y expansión de los PTI compensatorios y de emergencia, así como el conjunto de acciones asistenciales sustentadas en el trabajo voluntario, en el fortalecimiento del llamado tercer sector y la filantropía (Silva y Silva et al., 2014). Estas estrategias fueron centrales para reforzar el carácter mercadocéntrico de los servi-

cios sociales públicos y la responsabilización a los sujetos, contribuyendo a que el Estado reduzca su responsabilidad de garantizar la protección social de la sociedad en su conjunto.

Como indica Zibechi (2011) la política de “combate a la pobreza” que cimienta esta estrategia se transformó en la política pública más importante desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, sin embargo, señala que fue McNamara (secretario de Defensa de Estados Unidos y presidente del Banco Mundial en la década de 1960) quien se encargó de formular esta política que fue utilizada como estrategia contra la insurgencia en las regiones “periféricas”. McNamara parte de la idea de que

las “guerras de liberación nacional” se ganaban por cuestiones políticas y no tecnológicas como estaban acostumbrados los militares. De ahí la importancia concedida a la investigación en materia de “ingeniería de sistemas sociales” tarea en la que descolló la reaccionaria fundación Rand Corporation, que afirmaba que “la principal finalidad de la labor de contrainsurrección debe concentrarse en influir en el comportamiento y actuación del pueblo” [...] (Zibechi, 2011, p. 20).

Partiendo de la constatación de que la pobreza y la injusticia social podrían convertirse en factores de inestabilidad social y política, y contribuir así con los opositores al sistema capitalista y al imperialismo en las luchas contrahegemónicas e insurgentes, McNamara justifica política y técnicamente la política de “combate a la pobreza”.

A comienzos de esa década [1970] el enfoque se fue centrando en la lucha contra la “pobreza extrema” y la atención de las “necesidades humanas básicas” a través del apoyo a la participación de los pobres en el desarrollo [...]. El año siguiente [1973] se lanza un programa que hace énfasis en la salud y la educación primarias, agua potable y energía eléctrica dirigida al medio rural. No se cuestiona la estructura agraria ni la concentración de la propiedad de la tierra – factor clave en la pobreza y desigualdad rural – y se acomodan los proyectos a una realidad que no solo no se pretende cambiar, sino que se busca consolidar, aunque en los hechos se cuestiona el “efecto derrame” que

supuestamente tendría el crecimiento (Zibechi, 2011, p. 23).

Por este camino, la pobreza absoluta fue colocada en el centro de las “preocupaciones” de los gobiernos que consienten en ampliar la presencia de organismos multilaterales como el Banco Mundial a través de préstamos dirigidos al combate a la pobreza, programas de asesoría técnica y a los bancos de conocimiento. Sin embargo, esta estrategia, que fue central en la década de 1970, encuentra barreras en las siguientes décadas cuando la ortodoxia neoliberal invierte fuertemente en los programas de “ajuste estructural” y en programas compensatorios focalizados en la pobreza. Esta redefinición táctica del Banco Mundial tuvo impactos altamente negativos para los sectores subalternos que están experimentando un aumento del desempleo, intensificación de la pobreza, deterioro del poder adquisitivo y desprotección social, además de costos políticos significativos para los sectores dominantes.

La historia demostró que no fue casualidad que, después de un comienzo eufórico, los gobiernos que más directamente adhirieron al modelo neoliberal fueron derrotados en las urnas y las fuerzas que los reemplazaron encontraron en las políticas sociales un fuerte impulso. El período analizado se caracteriza por la pérdida temporal de legitimidad de los gobiernos neoliberales, pero, al mismo tiempo, indica las dificultades para construir proyectos alternativos, ya sea por fragmentación social o por la ampliación de los consensos conservadores (Sader, 2009).

Así, Mota (2014) afirma que los mismos personajes que impusieron los ajustes en los años 1980 y 1990 en América Latina, ante el agravamiento de la pobreza y la fuerza de los movimientos sociales que destituyeron a más de una decena de presidentes neoliberales, inician una revisión táctica de sus propuestas, que se conocieron como Post-Consenso de Washington. Esas “nuevas” propuestas alteraron parte de las directrices sobre “ajustes estructurales” e instituyeron la concentración de inversiones públicas sociales en programas de combate a la pobreza en los países periféricos.

A partir de la década de 1990, el movimiento de izquierda latinoamericana se ha orientado hacia la resistencia al neoliberalismo, culminando con las elecciones parlamentarias que llevaron al poder a gobiernos de izquierda y de centro izquierda en países de la región, como Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela. En la década del 2000, estos sectores progresistas llegaron al poder con discursos antiimperialistas y en defensa del desarrollo nacional y la autonomía de los estados nacionales, luego de décadas de imposición de los organismos financieros internacionales a favor de las políticas de ajuste estructural (Mota, 2014, p. 5).

El surgimiento de este movimiento se realiza a través de un discurso que apuesta al crecimiento como medio para solucionar los problemas que generan las desigualdades, discurso que ya está presente en la historiografía de la región y que ha sido utilizado sistemáticamente por gobiernos de tradición ideológica conservadora, así como por aquellos orientados por una concepción progresista. Como veremos más adelante, gran parte de los gobiernos progresistas de centroizquierda (sin abandonar la idea del Estado como dinamizador de la economía y espacio de conciliación y negociación, y reafirmando su compromiso con el capital) consolidan importantes avances en materia de reducción de la pobreza absoluta y las desigualdades de raza y género.

3. Reflexiones sobre la experiencia progresista en Brasil

La perspectiva adoptada por los gobiernos progresistas⁵ ha sido asociado, especialmente

⁵ En este campo, “están los gobiernos que pueden ser llamados como neodesarrollistas (Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y, según algunos criterios, Chile). Sus políticas se estructuran en torno a alguna idea de conciliación de clases. En política exterior, son más pragmáticos en su relación con las potencias occidentales, especialmente con Estados Unidos. En lugar de socialismo, proponen mejorar el sistema actual. En el caso de Argentina, el discurso de los Kirchner proponía la construcción de un ‘capitalismo serio’ (partiendo del principio que aquel practicado por sus antecesores no lo fueron)” (Fuser, 2018: 82).

en el caso brasileño, con el “neodesarrollismo”, que se inspira en la estrategia de desarrollo que orientó las economías de los países de la región entre los años 1930 y 60. La concepción político-económica sustentada por los “neodesarrollistas” afirma que el consenso neoliberal y sus preceptos privatizadores no han logrado resolver los principales problemas de los países periféricos, especialmente el tema de la desigualdad social, hecho que coloca en el centro de las acciones gubernamentales al Estado a las políticas de transferencia de ingreso para paliar las desigualdades sociales y promover la justicia social.

Los gobiernos latinoamericanos progresistas de centroizquierda que abrazaron esta estrategia tenían en sus directrices programáticas una promesa de crecimiento económico con desarrollo social. Dos ideas centrales resumen sus supuestos: a) la lucha contra el neoliberalismo se realiza con el crecimiento de la economía mediado por la intervención del Estado; y b) el crecimiento conduce inexorablemente al desarrollo social (Mota, 2014). No obstante, como sostiene Souza Filho (2014), guiado por la Teoría Marxista de la Dependencia, el auto-denominado “neodesarrollismo” –que orientó, por ejemplo, a los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil– no pasa de ser un modelo neoliberal con ajustes que mantiene la dinámica estructural de la dependencia, caracterizada por la superexplotación de la fuerza de trabajo.

Como señalan Zibechi y Machado (2017), la defensa progresista de “más Estado” y del incremento del gasto social es expresión de la retórica antineoliberal que marca este tipo de progresismo que no realiza reformas estructurales y profundiza el proyecto extractivo exportador apoyado en la explotación de los recursos no renovables (minerales e hidrocarburos) y en la exportación de *commodities* (soja, maíz, carne). Este modelo consolida una nueva estrategia de dominación que fue

denomina de “consenso de *commodities*”.⁶ Existen varios estudios que indican que este proyecto económico no genera empleos, que es altamente destructivo de naturaleza y que intensifica la dependencia y subordinación de nuestros países. Sin embargo,

Es difícil discutir que donde los “progresistas” gobiernan - o gobernaron - hay una mejora general en el nivel de vida de la población en relación con la etapa neoliberal anterior. Su explicación es variada, y está relacionada con un abanico de factores que engloban desde la etapa de bonanza económica vivida durante la llamada era dorada de las *commodities*, que generó la posibilidad de inversión social en salud y educación. A esto hay que sumarle el rescate de prácticas republicanas abandonadas por el neoliberalismo, el reconocimiento institucional de la diversidad étnica, ciertos avances en materia de género, así como una larga lista de reformas normativas (Zibechi; Machado, 2017, p. 75).

En otras palabras, esta estrategia fue utilizada, al mismo tiempo, como un camino para ampliar las políticas de redistribución del ingreso orientadas a expandir el consumo a través del acceso al crédito y el endeudamiento de los trabajadores, aumentos salariales y transferencias monetarias hacia los sectores más empobrecidos donde se destacan las PTI. También hubo un aumento de las inversiones en áreas como salud, educación (no siempre acompañadas de un aumento de los servicios públicos) y reconocimiento y amplia-

ción de derechos que contribuyeron a la reducción de las desigualdades y opresiones.

El impacto de tales cambios en las políticas sociales implica en el reemplazo, o al menos secundarización y reducción de políticas y acciones del Estado con carácter permanente y público (como fueron la previsión social, salud y educación) a favor de políticas y programas focalizados en las poblaciones y regiones más empobrecidas, especialmente a partir del conjunto de reformas estructurales que continúan inspirándose en el Consenso de Washington. Fue, por tanto, en un contexto de recrudescimiento y persistencia de la pobreza y las desigualdades y de cambios del patrón de regulación económica y social que surgieron y/o se ampliaron los PTI en la década de 1990, que fueron incluidos en la agenda de los gobiernos electos entre las décadas de 1990 y 2000, muchos de ellos con tendencias progresistas.

En el caso brasileño en particular, la victoria del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones de 2002, partido vinculado a varios sectores considerados de izquierda en el espectro político, representaba la posibilidad de limitar el avance del proyecto neoliberal que dominó al país en la década de 1990, y trajo la esperanza de un “gobierno popular”. Sin embargo, se conservaron las características esenciales de la política económica y social del gobierno anterior (Filgueiras; Gonçalves, 2007).

El primer gobierno de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006), continuando la gestión de Fernando Henrique Cardoso (1994-1998 y 1999-2002), mantuvo su compromiso con el ajuste fiscal y el superávit primario. Este compromiso fue fundamental para perpetuar las políticas sociales focalizadas dirigidas a los más pobres y miserables. En otras palabras, desde el inicio del primer gobierno de Lula se evidencia la continuidad de la estrategia que busca reducir las inversiones en lo social como forma de obtener recursos para la amortización y pago de la deuda pública. Como señala Antunes, con el ciclo progresista “en lugar de iniciar una nueva era y dismantelar el neoliberalismo, nos empantanamos y nos revolcamos en la continuidad del nefasto proyecto de desertificación social y política del país, iniciado por

6 Svampa (2013) sostiene que la exploración y exportación de materias primas no son actividades nuevas en América Latina, sin embargo, en los últimos años del siglo XX un nuevo contexto de acumulación intensificó su explotación, a través de mega proyectos para el control, exploración y exportación de bienes naturales. La autora denomina a este proceso un “Consenso de *commodities*” que se sustenta en el *boom* de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo, cada vez más demandados por países centrales y potencias emergentes como China. Se trata de un movimiento que genera indiscutibles ventajas comparativas para el crecimiento económico y las reservas monetarias, pero al mismo tiempo, produce nuevas asimetrías y profundiza las desigualdades. Desde el punto de vista de la lógica de la acumulación, la autora afirma que el “Consenso de *commodities*” conduce a una profundización de la dinámica del despojo de tierras, recursos y territorios y produce nuevas formas de dependencia y dominación.

Collor, desarrollado por FHC y ahora mantenido por el gobierno del PT” (2005, p. 155).

El casamiento entre las políticas económicas neoliberales y las políticas sociales focalizadas de combate a la pobreza fue acompañado de una reducción relativa de las ya limitadas políticas de salud, previsión y educación. La permanencia de mecanismos para garantizar los elevados superávits primarios fue fundamental para asegurar esta reducción presupuestaria junto con la intensificación de los programas de privatización directa e indirecta. De esta forma, se liberaron recursos financieros para ser destinados al pago de la deuda pública y externa. Estos superávits primarios, obtenidos de manera sistemática durante el segundo gobierno de Cardoso y durante los gobiernos del PT, fueron acompañados de un aumento de la carga tributaria que recae sobre los trabajadores, facilitando una brutal transferencia de ingresos de la sociedad en su conjunto al sector financiero y los grupos rentistas; en particular hubo una transferencia de los ingresos del trabajo y los ingresos del “capital estrictamente productivo” (pequeño y mediano) hacia los grandes grupos económicos dominados por el capital financiero (Filgueiras; Gonçalves, 2007, p. 161).

La política social de los Gobiernos del PT en las últimas décadas impulsó un importante cambio de la protección social brasileña que busca distanciarse de los preceptos constitucionales y la idea de seguridad social contenida en la Carta Magna de 1988.⁷ Los mecanismos de protec-

7 La Constitución Federal de 1988 marca el proceso de redemocratización de la sociedad brasileña después de más de veinte años de dictadura. Ciertamente el texto constitucional recibió influencias de distintos matices ideológicos -profundamente marcado por la incidencia neoliberal- sin embargo, también fue fruto de una fuerte movilización popular, la Constitución, reflejó la búsqueda de la afirmación de las políticas sociales, criticando el carácter clientelista y paternalista, surgido de la tradición política brasileña. Así, la Constitución apuntó a un nuevo patrón de política social, presentando avances en materia de derechos sociales. Reforzando el concepto de Seguridad Social como un derecho ciudadano y un deber del Estado, se establece en la ley una estructura de protección social sin precedentes en la historia brasileña, integrada por el trípode: salud, previsión social y la política asistencial.

ción social en las últimas décadas, invadidos por los procesos de privatización y focalización, se concentran en la creación de redes mínimas de protección que contribuyen a la reducción de los beneficios y a la selectividad de los beneficiarios, al tiempo que facilitan la creación de nuevos nichos de inversión para el capital y formas de acceso al fondo público por parte del sector privado.

Este formato de política social directamente vinculado a las políticas económicas neoliberales apoyadas en el “consenso de *commodities*” (Svampa, 2013), que se consolidó en las primeras décadas del siglo XXI, coloca a los PTI en el centro, concomitantemente con un proceso de restricción y privatización de las políticas de salud, previsión social y educación, ampliando así la parte de los recursos públicos destinados a la deuda externa. Mientras avanza la mercantilización y privatización en la salud y previsión social, la política asistencial se expande, convirtiéndose en un nuevo fetiche para abordar la desigualdad social.

4. Crisis del ciclo progresista

Las transformaciones mencionadas anteriormente no son exclusivas de Brasil, ellas se presentan como una tendencia en varios países capitalistas; sin embargo, esas transformaciones iniciadas en las últimas décadas que implican cambios en las políticas de protección social se llevarán a cabo con particularidades en las diferentes formaciones sociales. Pero es importante destacar entre los trazos comunes en América Latina la derrota de varios gobiernos progresistas, ese proceso indica el avance del conservadurismo de derecha en el continente. Como menciona Paulani, pensando en la realidad brasileña,

La crisis internacional de 2008 complica, aunque no de inmediato, la continuidad de esa estrategia [progresista], en principio contradictoria, entre la política económica liberal y los programas sociales de alto impacto. En el inicio de la segunda década de este siglo se combinó, por un lado, el agravamiento de la crisis en los países emergentes (gracias a la desaceleración del crecimiento de EE.

UU. y, posteriormente, el de China) y, por otro lado, un conjunto de medidas de política económica destinadas a enfrentar esa situación, cosa que después, resultó un equívoco (2019, p. 53).

La crisis de 2008 marca el contexto de esta nueva fase de ataque del capital sobre los Estados nacionales y sus políticas de protección social; sus impactos llegan a América Latina con más fuerza a partir de 2010, alterando la dinámica “progresista” del continente. Mascaro (2019) sostiene que la crisis brasileña, haciéndose eco de la crisis internacional, se da en la oportunidad y en la aglutinación de contradicciones y antagonismos variados entre clases, grupos e individuos, con los que los gobiernos del PT operaron su política democrática de cooptación. En un corto lapso aquellas estrategias que buscaban garantizar más derechos para las mayorías trabajadoras y sectores subalternos son reemplazadas por mecanismos que buscan poner fin a muchos de los derechos sociales u orientar la protección hacia grupos específicos considerados minorías (mujeres, poblaciones indígenas etc.). La crisis económica y política llevó, en el caso de Brasil, al golpe contra Dilma Rousseff, en 2016.

Frente a la crisis que estalló en 2008, la acumulación de grandes grupos encontró en el país un gran mercado a conquistar, caso fueran superados los obstáculos parciales del PT a los ataques neoliberales y privatistas. A partir de entonces, se desarrolló una feroz lucha de clases que resultó en la destitución de los gobiernos del PT del poder federal brasileño (Mascaro, 2018, p. 680).

El proyecto de capital, que se ha consolidado a través de un proceso denominado por Boito (2016) como una ofensiva restauradora neoliberal ortodoxa, busca administrar la crisis actual a través de: ajuste fiscal para asegurar el superávit primario, la extranjerización de los recursos naturales, la mercantilización de la naturaleza, acceso ilimitado del fondo público al sector privado. Esta estrategia no pretende dismantelar la política macroeconómica ligada a los gobiernos progresistas anteriores, sino radicalizarla. Al mismo tiempo, avanza el proceso de retroceso de los derechos humanos, sociales y laborales, así como se refuerza la estrategia de criminalización de las

organizaciones y luchas que se oponen al proyecto actual.

Es importante mencionar que el ataque a los gobiernos progresistas en América Latina y la derrota de muchos de ellos, indica el avance de la programática conservadora de derecha que se está apoderando del continente y que también se expresa en la despolitización de los sujetos, en el aumento de discriminación racial, intolerancia al pensamiento diferente, falta de respeto a los derechos humanos, xenofobia, etc.

En Brasil, en un primer momento en el gobierno de Michel Temer (agosto de 2016 a diciembre de 2018), se inició una serie de ataques contra las acciones y políticas implementadas por los gobiernos del PT que significaron, en su momento, avances en materia de derechos y garantías para los trabajadores que lograron mejoras en las condiciones de vida gracias a los PTI, programas habitacionales, la vinculación de algunos beneficios sociales al salario mínimo reajustado anualmente, la reducción de las tasas de desempleo, los subsidios al crédito que facilitaron el consumo, etc. Asimismo, a partir de 2016 se intensifican las propuestas de “reformas”, orientadas al mercado.

También se aprueba otra reforma laboral, la ley de tercerización y la Enmienda Constitucional N.95/2016, que congela el gasto social del gobierno federal por 20 años. En ese momento Temer, presidente en funciones, intentó una vez más aprobar una nueva etapa de la reforma previsional (iniciada en los gobiernos anteriores) sin obtener éxito; ese fracaso se debió a la enorme presión popular y a las dificultades políticas para articular un acuerdo que permitiera el avance de la reforma.

La crisis del ciclo progresista en Brasil, caracterizado por la caída del PT, inaugura una fase de ataques contundentes contra los avances sociales conquistados en las últimas décadas. El aumento de la explotación laboral, la financierización de la previsión social y la privatización son sus marcos inmediatos (Mascaro, 2019).

Para avanzar hacia la intensificación de las reformas, era necesario corroer y destruir a los gobier-

nos progresistas y cambiar las reglas del juego democrático. Como menciona Demier (2017) la democracia se blinda, es decir, la democracia se vuelve cada vez más impermeable a los intereses y demandas de los sectores subordinados, proceso que es acompañado de una intensificación del brazo coercitivo del Estado. Las elecciones de 2018 también consagran un giro conservador en la política brasileña con la llegada de Bolsonaro a la presidencia de la República. Sin embargo, como indica Mascaro,

La bandera de la gobernanza del capital es la misma: atención al mercado y a los intereses financieros y rentistas; privatizaciones; rebajar las condiciones para las empresas estatales; pérdida de la soberanía económica; descrédito a los instrumentos de control social, laboral y ambiental (2019, p. 29).

El gobierno Bolsonaro en los dos primeros años de gestión definió una estrategia para avanzar con las privatizaciones (de la riqueza natural, recursos no renovables, empresas públicas), atacar a las universidades públicas y, sobre todo, pone a la previsión social como blanco de reformas como forma de ampliar los espacios para las inversiones especulativas del capital. La reforma aprobada en 2019 cambió los regímenes de previsión social, aumentó la edad mínima y el tiempo de contribución, redujo la jubilación de los trabajadores rurales, tornando más rígidas las condiciones para acceder a los beneficios sociales.

En el ámbito de la política asistencial, el gobierno de Bolsonaro redujo el presupuesto en más del 50% para financiar el Sistema Único de Asistencia Social y el Programa Bolsa Familia que redujo (alrededor del 11%) el número de beneficiarios y amplió la lista de espera para acceder a esta transferencia (de 1,7 millones de familias) (Silva, 2020).

En el ámbito de la salud, Bravo y Peláez (2020) afirman que merece ser destacado el decreto que extingue varios consejos y órganos colegiados de la administración pública federal, estableciendo nuevas directrices para su funcionamiento. Un retroceso que reduce la ya pequeña participación

de la sociedad civil en el control y dirección de las políticas de salud. Asimismo, en tiempos de Pandemia, que ya mató a más de 470 mil personas en Brasil e infectó a más de 10 millones, el ejecutivo federal reduce el presupuesto para la salud y retrocede en la política de salud mental proponiendo una reforma inspirada en un modelo biomédico y centrado en la hospitalización, opuesto a las propuestas del movimiento de defensa del Sistema Único de Salud público estatal y de la Reforma Psiquiátrica en Brasil (CFESS, 2020).⁸

Consideraciones finales

A partir de lo expuesto, podemos decir que el proceso económico-político en marcha en Brasil no se refiere a una crisis política aislada ni a un reflejo de la crisis mundial. Necesitamos, para profundizar el análisis, considerar las determinaciones que ayudan a comprender lo que está sucediendo en el país en un contexto más amplio, el de la crisis estructural del capital.

La crisis política que depone a Dilma Rousseff y trae a la escena a Bolsonaro exagera las contradicciones ya presentes en el proceso político brasileño y en la sociedad. Sin embargo, la crisis está provocada, fundamentalmente, por la fuerte ofensiva restauradora del campo neoliberal. Un golpe que instauró un gobierno de hombres blancos, ricos, conservadores y poderosos que se aliaron con grupos y líderes religiosos ultraconservadores, que, sin representar las demandas,

8 Con relación a la pandemia, la situación brasileña continúa siendo peculiar, “El gobierno de Bolsonaro, siguiendo la lógica del necropoder, ha mantenido, desde el inicio de esta pandemia, la posición de negar la ciencia, minimizar los riesgos del nuevo coronavirus y difundir desinformación. ‘El caso más significativo ocurrió luego de que la justicia prohibiera la transmisión de la campaña ‘*Brasil Não Pode Parar*’ divulgada por SECOM (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República)” (Kalil; Santini, 2020, p. 2), una clara demostración del desprecio de este gobierno por la pérdida de vidas humanas.’ La campaña, se posiciona contra el aislamiento social recomendado por la mayoría de los gobiernos del mundo y por el Ministerio de Salud, creando un ambiente de controversia y contribuyendo para transformar la pandemia en ‘infodemia’” (Paula, 2020, p. 248).

reivindicaciones y luchas de los trabajadores, las mujeres, población negra y otros grupos históricamente excluidos del poder y el control, retomaron una agenda de neoliberal ortodoxa y conservadora, con ataques frontales a los derechos.

Como ya se mencionó, lo que está en juego es la necesidad de que los grandes capitales tomen nuevas y mayores porciones del fondo público y que se apoderen de los espacios de control para enfrentar la crisis actual que es tratada, en el discurso mistificador, como una crisis momentánea que solo será resuelta con la reducción del rol regulador del Estado y con el recorte del presupuesto destinado a las políticas sociales y laborales. Sin embargo, como se comenta a lo largo del texto, la crisis actual es una crisis estructural, que cuestiona las posibilidades de valoración del capital y la perpetuación de la sociabilidad humana debido a la naturaleza destructiva del capital.

Sin reconocer el carácter estructural de la crisis, los representantes del capital insisten en la necesidad de reducir la intervención del Estado en todas aquellas áreas y sectores que no son de necesidad fundamental para el proceso de acumulación o que se convierten en límites para la expansión. Es así como, el avance de estas fuerzas destructivas (del trabajo, de la naturaleza y de la humanidad) en el país no solo pone en jaque el ciclo “progresista”, sino que implica un proceso de desmantelamiento definitivo de las estructuras de protección social existentes, estructuras que lograron sobrevivir con muchas limitaciones gracias a las luchas y resistencias. Esta desestructuración está acompañada de una brutalidad en el tratamiento de los diferentes campos que configuran los derechos humanos y sociales, y también de la intensificación de los rasgos autoritarios, violentos, punitivos, coercitivos y moralizantes, símbolos de la barbarie contemporánea.

Bibliografía

- Abreu, H. B. (1997). O contexto histórico-social da crise dos padrões de regulação sócio estatal. *Praia Vermelha*, 1: 49-74.
- Antunes, R. (2005). *A desertificação neoliberal no Brasil (Collor, FHC e Lula)*. São Paulo, Autores Associados.
- Boito Jr., A. (2016). A crise política do neodesenvolvimentismo e a instabilidade da democracia. *Crítica Marxista*, 42: 155-163.
- Bravo, M. I.; Pelaez, E. J. (2020). A saúde nos governos Temer e Bolsonaro: lutas e resistências. *Ser Social*, 46 (22): 191-209.
- CFESS (Conselho Federal de Serviço Social). (2020). Nota pública do CFESS contra os novos ataques à Política de Saúde Mental. Disponible en: <http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1772>
- Demier, F. (2017). *Depois do Golpe*. A dialética da democracia blindada no Brasil. Rio de Janeiro, Mauad Editora.
- Filgueiras, L; Gonçalves, R. (2007). *A Economia Política do Governo Lula*. Rio de Janeiro, Contraponto.
- Fuser, I. (2018). América Latina: progressismo, retrocesso e resistência. *Saúde em Debate*. 42 (3): 78-89.
- Iamamoto, M. (2010). *Serviço Social em Tempo de Capital Fetice: Capital financeiro, trabalho e questão social*. São Paulo, Cortez.
- Katz, C. (2008). *Las Disyuntivas de la Izquierda en América Latina*. Buenos Aires, Ediciones Luxemburgo.
- Mascaro, A. L. (2019). Dinâmica da Crise e o Golpe: de Temer a Bolsonaro. *Margem Esquerda*, 32: 25-32.
- Mascaro, A. (2018). *Estado e forma política*. São Paulo, Boitempo.
- Melo, E. (2018). *Mészáros e a Crítica ao Reformismo da Socialdemocracia Ocidental*. São Paulo, Instituto Lukács.
- Mészáros, I. (2002). *Para além do capital*. São Paulo, Boitempo Editorial.
- Mota, A. E. (2014). Crise, Desenvolvimentismo e Tendências das Políticas Sociais no Brasil e na América Latina. *Revista Configurações (Online)*. Disponible en: <http://configuracoes.revues.org/1324>

- Paniago, C. (s/d). Mézáros, a crise estrutural e seus impactos na luta revolucionária dos trabalhadores. *Primavera Vermelha*, s/d: 3-20.
- Paniago, C. (2017). Derrota do reformismo e abandono da crítica da economia política. *Anuário Lukács*, s/d: 139-164.
- Pastorini, A. (2007). O Espetáculo da Pobreza: máscara dos antagonismos das sociedades capitalistas. Ponencia presentada en la III Jornada Internacional de Políticas Públicas de la UFMA.
- Pastorini, A.; Galizia, S. (2012). Principais características da redefinição da proteção social no Brasil. Em: Pastorini; Moraes Alves; Galizia. (coord.) *Estado e Cidadania. Reflexões sobre as políticas públicas no Brasil contemporâneo*. Editora FGV, Rio de Janeiro, pp. 103-113.
- Pastorini, A; Martinez, I. (2014). Tendências das Mudanças da Proteção Social no Brasil e no Uruguai: A centralidade das Redes Mínimas na América Latina. *Katálysis*, 17 (1): 59-67.
- Paula, L. G. P. (2020). A conjuntura de uma pandemia e o que ainda está por vir: impactos e estratégias possíveis. *Serviço Social em Perspectiva*, 4 (2): 236-260.
- Paulani, L. M. (2019). Bolsonaro, o Ultraliberalismo e a Crise do Capital. *Margem Esquerda*, 32: 48-55.
- Sader, E. (2009). *A Nova Toupeira: Os Caminhos da Esquerda Latino-Americana*. São Paulo, Boitempo.
- Silva, M. M. da. (2020). Sistema Único de Assistência Social: entre o desmonte e a condição de serviço essencial no contexto da pandemia. En: Acosta, L. et al (coord.) *Em Tempos de Pandemia*. UFRJ, Escola de Serviço Social, Rio de Janeiro. pp.60-67.
- Silva e Silva, M. O. et al. (2014). *Programas de Transferência de Renda na América Latina e Caribe*. São Paulo, Cortez.
- Souza Filho, R. (2014). Política Social no Brasil: notas e críticas a partir da Teoria Marxista da Dependência. *Conexões Gerais*, 5: 25-33.
- Svampa, M. (2013). «Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina. *Nueva Sociedad*, 244: 30-46.
- Zibechi, R. (2011). *Política & Miseria – La relación entre el modelo extractivo, los planes sociales y los gobiernos progresistas*. Buenos Aires, La Vaca.
- Zibechi, R; Machado, D. (2017). *Os limites do progressismo – Sobre a impossibilidade de mudar o mundo de cima para baixo*. Rio de Janeiro, Consequência.